

San Miguel, diecinueve de abril de dos mil veintiuno

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de amparo don Luis Zurita Torres, procurador judicial, en favor de los niños Santiago Antonio Ruiz Cordero y Octavio José Ruiz Cordero y en contra del Consulado de Chile en Caracas y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el cierre de la solicitud de visas de responsabilidad democrática.

Expresa que los niños en cuyo favor se recurre son dos ciudadanos venezolanos menores de edad hijos de doña Coriannys Nazaret Cordero Vega y Nerio Antonio Ruiz Peña, quienes se encuentran en Chile desde noviembre de 2019. Señala que atendido que los padres han podido establecerse de manera exitosa en nuestro país, y encontrándose ambos a la espera de la aprobación de sus respectivos permisos de permanencia definitiva, en febrero de 2021 solicitaron visa de responsabilidad democrática para sus hijos. Sin embargo, el 18 de marzo de 2021, se percataron que la petición había sido cerrada sin que se les notificara alguna resolución de rechazo, archivo o cierre.

Indica que los niños en cuyo favor recurre cumplen a cabalidad con todos los requisitos para ser titulares de la vida de responsabilidad democrática. Expone que los padres realizaron la solicitud no solo con la finalidad de reunirse con sus hijos, sino que también con el objeto que uno de ellos pueda tratarse médicamente en nuestro país pues sufre de problemas renales que no han podido ser tratados en Venezuela producto de la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Expone que en la especie los menores de edad se encuentran privados de su derecho a entrar y residir en nuestro país a pesar de haber realizado el trámite de obtención de visa con todos los documentos requeridos por la autoridad, lo que vulnera su derecho a la libertad ambulatoria y el derecho a la libertad personal. En tal sentido, el acto de cierre del procedimiento de solicitud de visa de responsabilidad democrática vulnera la garantía anteriormente señalada toda vez que, además de negárseles la posibilidad de entrar legalmente al país, se les impide llevar a cabo su plan de desarrollo familiar junto a sus padres, imponiendo un obstáculo ilegítimo a la autonomía de los amparados.



Señala que la recurrida niega dos visas a dos menores de edad, uno en una condición médica grave, sin expresar ningún tipo de consideración. Sostiene que la decisión es arbitraria en vista del trato dispensado a otros menores de edad cuyas visas fueron aprobadas sin ningún inconveniente. En cuanto a la ilegalidad de la decisión, esgrime que el acto administrativo vulnera los artículos 16 y 41 de la ley 19.880, pues ésta no justifica ni transparenta los motivos del cierre o rechazo de la vida de los amparados. Añade que también se transgreden los artículos 45 y 46 de la misma norma atendido que nunca se les notificó la resolución de rechazo o cierre de la manera prescrita en la ley. Agrega que la falta de notificación impide que los interesados puedan recurrir administrativamente en contra de la medida.

Expresa que mediante el Oficio Circular N° 96 de 9 de abril de 2018 el Subsecretario de Relaciones Exteriores instruyó a todas las Misiones Diplomáticas y Consulares de Chile en el Exterior sobre el otorgamiento de las visas de responsabilidad democrática. Dichas visas revisten carácter humanitario, deben ser expeditas y su otorgamiento procede en los casos que el solicitante cumpla con los requisitos que la autoridad consular establezca. En el caso del Consulado General de Chile en Caracas, la Resolución Exenta N° 1764 de 11 de junio de 2020 dispuso los siguientes requisitos: pasaporte vigente, informe médico que acredite que el solicitante no padece enfermedad contagiosa, antecedentes penales apostillados y formulario de solicitud de visa.

Esgrime que los menores de edad poseen una especial protección, siendo el interés superior del niño un principio rector que permea toda la legislación. Invoca el artículo 3 de la Convención internacional de los Derechos del Niño y señala que es evidente que en el caso de marras no se tuvo en consideración el mencionado principio. Sostiene que también se ha vulnerado el artículo 10 de la Convención anteriormente referida y el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y el estado. Expresa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la necesidad de que los Estados parte eviten la separación de los



niños de sus padres, toda vez que éstos últimos poseen el derecho preferente de crianza de sus hijos.

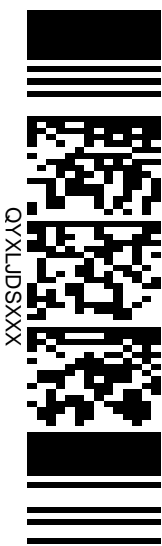
Finalmente solicita que se acoja el recurso en todas sus partes, con costas, ordenando a las recurridas dar curso progresivo a las solicitudes de visa de responsabilidad democrática, debiendo tramitarse en el más breve plazo posible con el fin de que los menores puedan reunificarse con sus padres en nuestro país, o en subsidio, se les otorgue un salvoconducto que habilite a los amparados a hacer ingreso al país.

Segundo: Que informa al tenor del recurso, en representación de las recurridas, don Julio Fiol Zúñiga, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de chilenos en el Exterior, solicitando el rechazo de la acción.

En primer término, alega la improcedencia del amparo señalando que los recurrentes no se encuentran arrestados, detenidos ni presos invocando jurisprudencia al efecto. Luego, refiere que el 29 de enero de 2021 se dictó el Oficio Circular N°17 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que imparte instrucciones para priorizar el otorgamiento de visas de reunificación familiar para haitianos y de responsabilidad democrática.

En los requisitos referidos a los solicitantes de visa de responsabilidad democrática, se exige que el peticionario de reunificación familiar sea un nacional venezolano con permanencia definitiva en Chile, respecto de su cónyuge, conviviente o hijos menores de edad. Refiere que, según sus registros, el 6 de febrero último se presentó una solicitud en favor del menor S.A.R.C, la que no cumplió con adjuntar todos los documentos necesarios para el otorgamiento de la visa. En la misma fecha se recibió otra solicitud en favor de O.J.R.C., la cual tampoco adjuntó los documentos solicitados. En ambos casos sólo se acompañó: fotografía, pasaporte, acta de nacimiento y certificado médico.

Expone que según en el numeral 7° de la Circular anteriormente citada se establece el requisito de “Carta de solicitud de reunificación familiar, autorizada por un ministro de fe, otorgada por un nacional venezolano residente en Chile, con permanencia definitiva solicitando la reunificación con su cónyuge o conviviente civil e hijos menores de edad que estén a su cargo”. En la especie, consta que los



padres de los amparados no cuentan con una permanencia definitiva otorgada sino solamente con una solicitud en trámite.

Expresa que alterar el orden establecido en orden a priorizar las solicitudes de reunificación de aquellos que cuentan con permanencia definitiva otorgada generaría un doble efecto negativo; primero, postergar otras solicitudes fundadas en reunificación, y segundo, atentar contra la certeza jurídica ya que si no se espera primero que a que se consolide la situación migratoria del reunificante, su solicitud de permanencia definitiva en trámite luego puede ser rechazada, debiendo el reunificante abandonar el país de acuerdo a la normativa migratoria, lo que resulta contradictorio con el objetivo buscado.

Hace presente que el 1 de abril pasado el Gobierno de Chile anunció que a contar del día 5 del mismo mes se cerrarán las fronteras por 30 días, tanto para chilenos como extranjeros residentes, y se prohibirá por 30 días también el reingreso de extranjeros no residentes en Chile con excepción de aquellos debidamente autorizados por la autoridad consular chilena del país de origen bajos criterios sanitarios fundados emitidos por la autoridad sanitaria mirando siempre el interés general del país.

Por último, aclara que las solicitudes de visa de responsabilidad democráticas de los niños en cuyo favor se recurre no fueron acogidas a trámite por cuanto no presentaron toda la documentación requerida, por lo que no avanzaron a la etapa de análisis.

Tercero: Que la acción de amparo, prevista en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto proteger a aquellas personas que ilegalmente sufran cualquier privación, perturbación o amenaza de su derecho a la libertad personal y seguridad individual, motivo por el cual, en el presente caso, corresponde determinar si, en la especie, el cierre de las solicitudes de visa de los niños venezolanos, se enmarca en alguna de esas hipótesis.

Cuarto: Que los cuestionamientos contenidos en el recurso relativos a la respuesta de “cierre de solicitud” efectuada por la autoridad competente sobre las visas requeridas no permiten vislumbrar a transgresión de disposición legal o



administrativa alguna. A mayor abundamiento, la recurrida informa que existe una directriz interna de priorizar en el otorgamiento de estas visas a aquellos que cumplan con sus exigencias, una de las cuales es que el solicitante de reunificación familiar tenga permanencia definitiva en Chile, presupuesto que no concurre en la especie, puesto que los padres de los niños en cuyo favor se recurre solo cuentan con solicitudes en trámite, lo que impide que la pretensión pueda prosperar. En efecto, de accederse a lo que se pretende por el recurso, podría darse la situación de que una vez ingresados los niños al país, a los padres se les negara la permanencia definitiva que actualmente está en trámite, lo que importaría un grave perjuicio para aquellos. Por lo anterior, la obtención de la visa democrática de los niños antes de obtener sus padres la permanencia definitiva en nuestro país podría constituir una presión indebida para la resolución de la solicitud realizada por sus padres.

Quinto: Que entonces y de lo que se viene razonando no es posible advertir una privación perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho constitucional establecido en el numeral 7º del artículo 19 de la Carta Fundamental, motivo por el que el recurso no podrá prosperar.

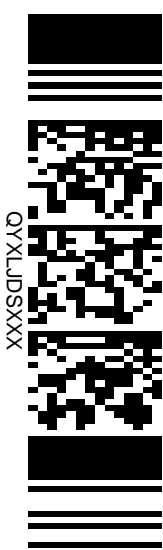
Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre la materia, **se rechaza** el recurso de amparo interpuesto a favor de O.J.R.C. y S.A.R.C., en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Consulado de Chile en Caracas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº 138-2021 Amparo

0YXLJDSXXX





QYXLPDSXXX

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U. Catepillan L., Liliana Mera M. y Fiscal Judicial Tita Aranguiz Z. San miguel, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

En San miguel, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>